

Pensar la resistencia

MAYO DEL 2021 CALI Y COLOMBIA

Alberto Valencia Gutiérrez
Carlos Humberto Ortiz Quevedo
José Fernando Sánchez Salcedo
María Eugenia Ibarra Melo
Stephanía Recalde García
Luis Carlos Castillo Gómez
Jorge Hernández Lara
Boris Salazar Trujillo
Fernando Urrea-Giraldo
Álvaro Guzmán Barney
María Gertrudis Roa
Jan Grill



Universidad
del Valle

Programa Editorial

Durante los meses de mayo y junio de 2021 se produjo en Colombia un inmenso estallido social, sin antecedentes en la vida del país, que puso en tensión la vida colectiva. La expresión más fuerte de este fenómeno se presentó en la ciudad de Cali, donde se movilizaron numerosos sectores de la población, con la participación sobresaliente de los jóvenes. Las ciencias sociales en Colombia, así como ha ocurrido a nivel internacional con el movimiento parisino de Mayo de 1968, girarán durante mucho tiempo alrededor de la investigación y la interpretación de lo sucedido durante estas semanas.

Un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, de la Universidad del Valle de Cali, hicimos un seguimiento al detalle de lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno, al calor de los acontecimientos, y este libro recoge las principales contribuciones, desde la sociología, la economía, la ciencia política, la comunicación social, las teorías del género. Somos conscientes de que estos ensayos se pueden convertir en un punto de partida fundamental para estudios posteriores, a pesar de que lo expuesto en ellos es aún provisional y sujeto a desarrollos posteriores.

Hemos tratado de mostrar la manera como los acontecimientos se inscriben en la coyuntura del Paro nacional, decretado en ese momento por diversas organizaciones sociales y sindicales, pero igualmente nos hemos enfocado en el estudio de lo acontecido de manera particular en la ciudad de Cali y su región metropolitana, y en las movilizaciones de apoyo que se presentaron en países con presencia de migración colombiana. Con este esfuerzo hemos querido responder a una de las tareas básicas de la Universidad pública, como es la contribución al mejor entendimiento de lo que nos ocurre, como punto de partida para proponer caminos que permitan superar los retos del presente.



Universidad
del Valle

Programa Editorial

Pensar la resistencia

MAYO DEL 2021 CALI Y COLOMBIA



Colección Ciencias Sociales

Ibarra Melo, María Eugenia
Pensar la resistencia: Mayo del 2021. Cali y Colombia/
María Eugenia Ibarra Melo, Carlos Humberto Ortiz
Quevedo, Pedro Quintín Quilez, Alberto Valencia Gutiérrez,
editores. – Primera edición. --
Cali : Programa Editorial Universidad del Valle, 2021.
246 páginas ; 24 cm-- (Colección: Ciencias Sociales)
1. Movimientos sociales - 2. Luchas sociales - 3.
Legitimidad política - 4. Paro Nacional 2021 - 5. Crisis
social - 6. Violencia - 7. Cali (Valle del Cauca) - 8.
Colombia
303.484 cd 22 ed.
I12
Universidad del Valle - Biblioteca Mario Carvajal

Universidad del Valle

Programa Editorial

Título: Pensar la resistencia: Mayo del 2021. Cali y Colombia

Editores: María Eugenia Ibarra Melo, Carlos Humberto Ortiz

Quevedo, Pedro Quintín Quilez, Alberto Valencia Gutiérrez

ISBN: 978-628-7500-93-8

ISBN-PDF: 978-628-7500-95-2

ISBN-EPUB: 978-628-7500-94-5

DOI: 10.25100/PEU.7500938

Colección: Ciencias Sociales

Primera edición

Rector de la Universidad del Valle: Édgar Varela Barrios

Vicerrector de Investigaciones: Héctor Cadavid Ramírez

Director del Programa Editorial: Francisco Ramírez Potes

© Universidad del Valle

© Editores

Diseño y diagramación: Hugo H. Ordóñez Nievas

Este libro, o parte de él, no puede ser reproducido por ningún medio sin autorización escrita de la Universidad del Valle.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es el responsable del respeto a los derechos de autor y del material contenido en la publicación, razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.

Cali, Colombia, noviembre de 2021

Pensar la resistencia

MAYO DEL 2021 CALI Y COLOMBIA

Alberto Valencia Gutiérrez
Carlos Humberto Ortiz Quevedo
José Fernando Sánchez Salcedo
María Eugenia Ibarra Melo
Stephanía Recalde García
Luis Carlos Castillo Gómez
Jorge Hernández Lara
Boris Salazar Trujillo
Fernando Urrea-Giraldo
Álvaro Guzmán Barney
María Gertrudis Roa
Jan Grill



Colección Ciencias Sociales

Contenido

Presentación	9
¿Qué está pasando en Colombia? Poder, legitimidad y crisis social <i>Alberto Valencia Gutiérrez</i>	13
Otra vuelta de tuerca La codicia de las élites en la pandemia <i>Carlos Humberto Ortiz Quevedo</i>	39
Reflexiones sobre prácticas y culturas políticas en el paro del 2021 <i>José Fernando Sánchez Salcedo</i>	53
“Al otro lado del miedo está el país que soñamos” Mujeres y feministas en el paro nacional de 2021 <i>María Eugenia Ibarra Melo, Stephania Recalde García</i>	79
Arde Cali. Sucursal del cielo y Capital mundial de la salsa <i>Luis Carlos Castillo Gómez</i>	103
De la irritación a la resistencia en medio del Paro Nacional <i>Jorge Hernández Lara</i>	133

No salgas de tu barrio Cali entre el horror y la esperanza <i>Boris Salazar Trujillo</i>	159
Algunos factores desencadenantes del levantamiento popular en Cali y su región metropolitana <i>Fernando Urrea-Giraldo</i>	175
La situación del Paro Nacional en Cali. Intervención en foro programado por la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali <i>Álvaro Guzmán Barney</i>	193
Lejos pero no ausentes Movilizaciones diaspóricas en el Paro Nacional del 2021 <i>María Gertrudis Roa, Jan Grill</i>	213

Presentación

Hace poco más de un mes se produjo un inmenso estallido social que ha puesto en tensión la vida colectiva en Colombia. En Cali esta crisis ha tenido su expresión más fuerte. Como aún no ha sido superada y persisten muchas incertidumbres, tanto sobre la forma de su desenlace como sobre el momento de su finalización, resulta sin duda prematuro ofrecer un balance definitivo.

Sin embargo, sí es posible plantear perspectivas analíticas y presentar elementos empíricos que pueden contribuir no solo a una mejor comprensión de lo que está acaeciendo, sino también ayudar a esbozar posibles vías de solución. Por esta razón, en medio de tan dolorosos y al tiempo esperanzadores momentos, los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas hemos estado participando en distintos eventos académicos y hemos hecho intervenciones públicas en distintos medios. Al calor de los acontecimientos hemos puesto en marcha los saberes y habilidades de nuestras disciplinas (la economía, la sociología, la historia, el análisis político, la perspectiva feminista) y nuestra propia experiencia investigativa para tratar de entender lo que está aconteciendo.

Esta compilación recoge algunos de esos aportes: textos en que se condensan y consolidan las aproximaciones, las reflexiones y los análisis expuestos y discutidos en esos escenarios, enriquecidos en muchas ocasiones por las preguntas, inquietudes y comentarios de los participantes y asistentes a los eventos. De hecho, en estas intensas sema-

nas transcurridas, estos intercambios nos han permitido amalgamar nuevas experiencias, atender distintas formas de aproximarnos a los acontecimientos y reelaborar así las perspectivas iniciales.

La inmediatez y cercanía del fenómeno estudiado implica que lo que acá se expone es aún provisional, sujeto a posteriores ajustes; pero también es cierto que en medio de estas circunstancias la tarea de una institución como la Universidad pública es poner al servicio de la sociedad aquello que orienta su ineludible misión en términos de investigación: aportar elementos que contribuyan a un mejor entendimiento de lo que nos sucede y proponer caminos para superar las dificultades presentes y los retos que tenemos por delante.

La primera parte de la compilación, compuesta por cuatro textos, permite situar a nivel nacional el fenómeno del Paro Nacional y contextualizar los acontecimientos que se han producido en Cali durante este último mes. Alberto Valencia reconstruye el proceso histórico vivido durante las últimas décadas para mostrar la peculiar y compleja situación a la que llegó el país en términos de falta de legitimidad política y crisis social. A continuación, Carlos Humberto Ortiz atiende a las dimensiones económicas que llevaron a que, en medio de las graves afectaciones para la población por causa de la pandemia Covid-19, una torpe propuesta de reforma tributaria se convirtiera en el detonador de una amplia movilización social. José Fernando Sánchez reconstruye algunas de las características centrales de las prácticas y culturas políticas colombianas y muestra la fragilidad de nuestro sistema social a la hora de tramitar los conflictos. María Eugenia Ibarra y Stephanía Recalde nos ilustran sobre el papel que las mujeres y las feministas han jugado durante estas últimas semanas, reconstruyendo tanto la forma en que sus reclamos se vinculan a procesos previos, como las nuevas inquietudes suscitadas durante una movilización en la que ellas han ocupado un lugar destacado.

La segunda parte, compuesta por cinco textos, se enfoca en el estudio de lo acontecido en la ciudad de Cali y su región metropolitana, precisamente donde el estallido social colombiano ha alcanzado las más altas cuotas de expresión, de violencia y sufrimiento. Luis Carlos Castillo describe y ubica los principales elementos de la movilización caleña, con especial atención al desarrollo temporal de los aconteci-

mientos y a su ubicación en los distintos espacios de la ciudad. Jorge Hernández disecciona con precisión y detalle los cambios experimentados en las formas de movilización y el ajuste constante de los repertorios de acción de los participantes. Boris Salazar, presenta a los jóvenes de la ciudad como actores principales de la movilización, afectados profundamente por las dificultades económicas, el impacto de la violencia y las dificultades de integración a un entorno urbano. Fernando Urrea explora los posibles factores que habrían dado el cariz especial al estallido social de Cali y la región metropolitana, un espacio atravesado por fuertes divisiones de clase, raza y altos índices de segregación espacial. Finalmente, Álvaro Guzmán aporta algunas notas orientadas a desentrañar las fuerzas y dinámicas que han estado presentes en la ciudad y hacen más comprensible lo acontecido en estas semanas.

La tercera parte recoge el texto de María Gertrudis Roa y Jan Grill, en el que reconstruyen con detalle las movilizaciones de apoyo que se han presentado a nivel internacional, especialmente, aunque no solo, en aquellos países con mayor presencia de migración colombiana.

El CIDSE y la Facultad agradecen la generosidad de nuestros colegas al aceptar publicar estos textos, así como el esfuerzo realizado para alistarlos en tan corto tiempo. También agradecen a la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad por su gentileza al ofrecer prestamente sus servicios de edición digital, y al Programa Editorial por su interés en la impresión física de la segunda edición.

Pedro Quintín Quilez

Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas
Universidad del Valle
Cali, junio del 2021

¿Qué está pasando en Colombia? Poder, legitimidad y crisis social

*Alberto Valencia Gutiérrez*¹

¹ Sociólogo, doctor en Sociología. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle. Integrante del grupo de investigación Sociedad, Historia y Cultura vinculado al Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la misma universidad. Columnista del periódico *El País* de Cali.

Colombia está viviendo en este momento una situación que tiene pocos antecedentes en la historia de las últimas décadas. Un paro que ha movilizadado de manera espontánea una enorme cantidad de ciudadanos, de origen heterogéneo, con fuerte presencia de jóvenes, sin que ninguna agrupación política u organización social o sindical pueda reivindicar para si una iniciativa exclusiva. La movilización ha estado acompañada de violencia y de actos vandálicos, protagonizados por personas de procedencia diversa (jóvenes, ciudadanos del común, disidencias de las FARC, grupos del ELN, pandillas juveniles, elementos de narcotráfico e, incluso, infiltrados); ha hecho presencia en buena parte del territorio nacional y no se ha limitado a un solo día, sino que ha perdurado por varias semanas. La reacción de las fuerzas del orden ha sido brutal en muchos casos y ha suscitado rechazos tanto dentro del país como desde el exterior.

Crisis similares a esta, aunque en proporciones variables, se podrían encontrar el 9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, cuando las turbas destruyeron el centro de Bogotá y de otras ciudades; el “paro patronal” de cuatro días que condujo a la salida de Gustavo Rojas Pinilla de la Presidencia el 10 de mayo de 1957; la conmoción que se produjo desde el domingo 19 de abril de 1970 como consecuencia del burlado triunfo electoral de Gustavo Rojas Pinilla en las elecciones presidenciales de ese año; el movimiento estudiantil de 1971 que comenzó en Cali con 8 muertos y 47 heridos y paralizó a cerca de 110 000 estudiantes en todo el país durante buena parte del año (*El País*, 28 de febrero de 1991, p. 1); el paro del 14 de septiembre de 1977 que produjo 18 muertes en Bogotá y otras ciudades del país; la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 con 111 muertos y 11 desaparecidos.

Los hechos sucedidos durante estos días han sido objeto de múltiples valoraciones, desde aquellos que los rechazan indignados y proponen la intervención brutal de la fuerza pública para contener los desmanes, hasta los que consideran que se trata de una legítima reivindicación popular, consecuencia de las precarias condiciones actuales. Lo importante es optar por la comprensión de lo que tenemos ante nuestros ojos en este momento, teniendo en cuenta que comprender no es justificar pero sí es la base para actuar.

El analista social debe responder a la exigencia de mantener una “neutralidad valorativa”, según la célebre expresión de Max Weber. Ni la admiración ni el rechazo deben servir de guía para orientar la indagación. Hay que preguntar simplemente en qué consiste lo que está pasando, cuál es su dinámica, cuál es su lógica interna, cómo se inscribe en la secuencia histórica de las últimas décadas, quiénes son sus protagonistas, cómo interactúan, qué objetivos proponen, y así por el estilo.

Además, si queremos comprometernos en una acción transformadora de una situación lo más importante es comenzar por su comprensión. *Savoir pour prévoir* era la consigna de los filósofos del siglo XVIII, en el momento en que se estaban creando las ciencias naturales. Ideales similares de comprensión se expresan, aunque en direcciones opuestas, en la obra de Auguste Comte o Karl Marx. El primero buscaba apuntalar la sociedad de su época sobre nuevas bases y el segundo transformarla, pero ambos consideraban que el trabajo científico era una precondition indispensable para la realización de sus objetivos.

Ningún fenómeno social se deriva de un solo aspecto. Debemos asumir la realidad como una configuración de elementos heterogéneos, confluencia de series causales de origen diverso, marcadas por diferentes niveles de particularidad o generalidad, con temporalidades diversas, que conforman una causalidad inédita, que no está presente en cada uno de sus componentes tomados aisladamente (de la Garza, 2018, pp. 139-147). Es necesario entonces “desagregar” los aspectos que se confunden en los hechos empíricos, estudiarlos por separado y luego mostrar la forma como se articulan (Touraine, 1973, p. 69).

En este momento confluyen un sinnúmero de elementos para producir el resultado que tenemos a la vista: la difícil situación social que se ha presentado en las últimas décadas, en Colombia y en otros países latinoamericanos, como consecuencia de las políticas neoliberales; la pandemia que ha agravado esta situación, debido no solo a la magnitud del nuevo problema que se ha presentado, sino a la manera torpe como ha sido gestionado por los gobiernos; la violencia imperante en este momento tal como se manifiesta en la muerte de líderes sociales, masacres, disputas entre grupos de narcotraficantes, disidencias de las

FARC, grupos del ELN; los avatares que ha sufrido el proceso de paz durante los últimos seis años. A esto habría que agregar el peso de situaciones locales como las que conocemos en Cali: las migraciones provenientes del Pacífico, las pandillas, los jóvenes sin futuro (“ninis”), las malas administraciones municipales, la ausencia del Estado, los elementos delincuenciales, etc.

Las cifras nos indican que estamos frente a una verdadera “explosión social” en todo el país. En el año 2020 el 42.5 % de los habitantes, equivalente a 21.2 millones, se encontraba por debajo de la línea de pobreza, 3.8 % más que en 2019, en un momento en que la línea de pobreza en América Latina era del 33.7 % (8.8 puntos menos que Colombia). Existe un número de ciudadanos que sobreviven con menos de \$331 168 pesos mensuales equivalentes a 87 dólares. El 65 % de la población solo puede comer dos veces al día y más de un millón y medio de personas una sola vez. El desempleo gira alrededor del 17 % y habría que agregarle la parálisis de los sectores informales de la economía, gente que trabaja un día para comer al día siguiente. El coeficiente de Gini de 0.53 es el segundo más alto después de Haití, país inviable por su pobreza y desinstitucionalización (DANE, 2021).

Sin embargo, no estamos simplemente frente a una crisis social, que ha hecho que las gentes se boten a las calles a reclamar asistencia y defender sus derechos, como resultado de necesidades insatisfechas, la pobreza y la miseria, la falta de oportunidades, el desempleo crónico agravado por la coyuntura. Habría que preguntar hasta qué punto una situación extrema de pobreza y de miseria produce una conmoción como la que estamos viviendo. Muchos mecanismos de control social podrían funcionar para que esto no ocurriera e, incluso, existiría la posibilidad de impulsar proyectos colectivos desde el Estado o desde las organizaciones sociales para superar esta situación. Además, la situación actual no es realmente nueva, ya que se trata de una “deuda social” que se ha ido agravando progresivamente. ¿Por qué se desencadena precisamente en este momento y no antes?

La idea que queremos proponer es que lo sucedido es el resultado de la confluencia de dos procesos: una gran crisis social y una crisis política e institucional, resultado de una progresiva pérdida de legitimidad del ejercicio del poder por parte del Estado, que finalmente

se agravó en las condiciones en que se ha desarrollado el gobierno de Iván Duque. La confluencia de ambas condiciones nos permite explicar lo que está sucediendo y lo que podría ocurrir en el futuro inmediato: un proceso revolucionario de consecuencias impredecibles, una solución de fuerza o la aceleración de un tercer ciclo de violencia. Otra salida estaría por inventarse.

Los antecedentes

Colombia conoció entre 1946 y 1965 un primer ciclo de violencia de grandes proporciones conocido como la *Violencia* (con mayúscula), que enfrentó a los partidos Liberal y Conservador, en una lucha sangrienta caracterizada por la sevicia y el horror. A partir de 1958 las cifras de homicidios comienzan a disminuir y conocemos un par de décadas relativamente tranquilas con respecto a lo que había sucedido. Desde mediados de los años 1980, incluso desde antes —algunos hablan del paro del 14 de septiembre de 1977 como el punto de quiebre— se produce un segundo ciclo de violencia de grandes proporciones, atizado por la fuerza del narcotráfico y otras fuentes de riqueza, que hacen posible la financiación de los grupos armados. La Constitución de 1991 se presentó como un “acuerdo de paz” para poner fin al conflicto, pero finalmente resultó inocua. El crecimiento de los grupos armados durante la década de 1990 fue exponencial, sorpresivo incluso para sus propios protagonistas (González, 2014, pp. 379 y ss).

Desde mediados de 1980 se conforman los grupos de “autodefensa” para hacer frente a la lucha “contrainsurgente”, pero rápidamente encuentran en el narcotráfico o en la lucha por el control y la propiedad de la tierra razones para desarrollar sus propias agendas, más allá de lo puramente defensivo. El enfrentamiento violento llegó a ser insostenible entre 1995 y 1998. El Ejército colombiano sufrió las peores derrotas de su historia (Puerres, Patascoy, Las Delicias, la toma de Mitú, etc.). Las masacres se multiplicaron y el número de efectivos de los grupos armados alcanzó grandes proporciones, hasta el punto de que en algún momento llegamos a tener más de 55 000 hombres en armas. A finales de esta década el aprendizaje de la geografía del país ya no la hacíamos siguiendo el paso de los ciclistas de la Vuelta

a Colombia por los lugares más apartados del país, como en épocas más felices, sino a partir de las masacres, que nos llevaban día a día a descubrir por la televisión y la prensa sitios recónditos de nuestro territorio: Honduras, La Negra, Punta Coquitos, La Mejor Esquina, El Salado, El Tigre, Bojayá, Granada, Comuna 13, El Naya, San Carlos, El Placer, Bahía Portete, etc.

Ante esta situación se abrió paso en la opinión pública la posibilidad de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que había logrado un gran dominio territorial y amenazaba, incluso, con cercar grandes ciudades como Bogotá. Este “giro de la opinión” hizo posible el nombramiento de Andrés Pastrana Arango como presidente de Colombia, con el mandato de impulsar unas negociaciones, que efectivamente comenzaron el 7 de enero de 1999. El país cifró sus ilusiones en este proceso pero finalmente todo terminó en un gran fracaso porque ni el gobierno ni las FARC estaban interesados realmente en una negociación y las conversaciones se utilizaban más como una especie de tregua, mientras se reorganizaban las fuerzas de la guerra. El gobierno optó por el conocido Plan Colombia con ayuda de los Estados Unidos para combatir inicialmente el narcotráfico, pero que luego se reorientó contra la guerrilla. Las FARC utilizaron los 42 000 km de la zona desmilitarizada del Caguán, para fortalecer sus fuerzas y crecer en número. Ante la arremetida de la guerrilla y la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el presidente se vio obligado, en febrero de 2002, a clausurar las negociaciones, a pesar de que estas eran la justificación de su existencia.

La opinión pública dio un viraje total y se dispuso entonces a demandar medidas de fuerza para acabar con las guerrillas. En este marco llega a la Presidencia de la República un candidato disidente del Partido Liberal, que a comienzos del año apenas si competía en las encuestas con el margen de error, pero que en las elecciones de mayo resultó triunfador en primera vuelta con una diferencia apreciable de votos sobre su contendor (5 862 655 contra 3 514 779 de Horacio Serpa) (“Elecciones presidenciales de Colombia de 2002”, 5 de junio 2021). En ese momento “la gran mayoría de los colombianos fingía no saber nada de su pasado”; nadie se preguntaba por sus antecedentes en la Aeronáutica Civil o en la Gobernación de Antioquia, porque

se presentaba simplemente como una persona “con carácter y mano dura”, capaz de recuperar el dominio territorial del Estado y devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Nació así la política de Seguridad Democrática, orientada a aplastar militarmente a la guerrilla de las FARC como primera prioridad. Los grupos paramilitares comenzaron a darse cuenta de que su labor antisubversiva había sido asumida por el Estado y optaron igualmente por una negociación que comienza a concretarse en 2005.

El gobierno de Álvaro Uribe no escatimó medios para combatir a las guerrillas durante los primeros seis años con “resultados satisfactorios” para una parte de la opinión. Cualquier persona que hubiera llegado a la Presidencia de la República en 2002 debía enfrentar la tarea de recuperar el dominio territorial del Estado, en un momento en que las FARC hacían presencia en gran cantidad de municipios. Sin embargo, el problema no consiste simplemente en que el nuevo presidente hubiera realizado esta tarea, sino en la forma como lo hizo.

El uso de medios ilegales para combatir a los grupos ilegales es una práctica que muchos Estados, bajo el ropaje de la “razón de Estado”, han utilizado como estrategia para defender el orden social. Eso ocurrió, por ejemplo, en Francia con la guerra de Argelia que culmina en 1962 y eso ya existía en Colombia desde tiempos inmemoriales: el uso de las torturas o de las desapariciones, desde finales de los años 1970; la persecución de Pablo Escobar por parte del Estado durante el gobierno de César Gaviria se hizo con base en una alianza con el llamado “Cartel de Cali” para conformar un grupo que se dio en llamar los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). La conformación de “grupos de autodefensa”, en connivencia con sectores militares, que luego se llamarían “paramilitares”, es la pieza maestra de esta forma de combatir la ilegalidad con la ilegalidad.

Los gobiernos anteriores habían utilizado la ilegalidad en cierto grado pero, con la llegada de Álvaro Uribe al poder, el uso de medios ilegales se entronizó en el corazón del Estado en una proporción que no existía antes, bajo la actitud complaciente de una opinión pública que en ese momento estaba sintonizada con el “todo vale”, con tal de acabar con las FARC. El paramilitarismo fue uno de los principales electores del nuevo gobierno (la “parapolítica”), parte significativa de

los antiguos funcionarios de Uribe terminaron en la cárcel y la cifra de 6402 “falsos positivos” (muchachos asesinados que se hacían pasar por guerrilleros para alcanzar prebendas o bonificaciones en las filas militares) son un testimonio de la ilegalidad que se apoderó de la acción gubernamental. La primera pieza del argumento que queremos sustentar, la más importante tal vez, es que la situación que estamos viviendo hoy en día está “pasando la factura” del inmenso costo social que representó para el país el enfrentamiento de los grupos ilegales con medios ilegales.

El año 2008 representa un punto de quiebre para los actores en conflicto: las FARC y la política de Seguridad Democrática, la cual comienza a “hacer agua” desde ese momento. La muerte de Raúl Reyes en un campamento en el Ecuador es el punto de quiebre de esta organización, al igual que la muerte del legendario líder histórico Manuel Marulanda Vélez. Las FARC comprenden la nueva situación y se repliegan a la tradicional “guerra de guerrillas” en sus “santuarios históricos”. De manera paralela se impone un cambio en la política gubernamental frente al conflicto (Pizarro, 2020, *passim*).

En 2010 llega a la Presidencia de la República el antiguo ministro de Defensa del presidente Uribe, con su pleno apoyo para continuar la tarea. El nuevo mandatario mantiene la política de persecución de las FARC hasta el punto de que termina con la vida de dos de los más importantes dirigentes de la organización: el 22 de septiembre de 2010 es abatido Jorge Briceño (“mono Jojoy”) y el 4 de noviembre de 2011 Alfonso Cano, el nuevo comandante general de las FARC. Sin embargo, al mismo tiempo que continuaba la lucha con el grupo guerrillero, el presidente Santos, desmarcándose de su mentor, se dedicó a desarrollar en secreto contactos autónomos para impulsar una negociación.

Los pactos secretos se hacen públicos en septiembre de 2012 y a partir de allí comienzan cuatro años de negociaciones que culminan en 2016. El gobierno lleva a cabo una negociación realista, que supera los fracasos anteriores y saca adelante unos acuerdos realizables y posibles, sin que eso signifique una entrega del Estado al grupo armado o una “revolución por decreto”. Lo convenido gira alrededor de cuatro aspectos: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, implementación, verificación y refrendación. A diferencia de lo que

habían sido las infructuosas negociaciones del Caguán, el documento final demuestra que sí hubo voluntad política de llegar a un acuerdo. Las reformas que se pactan, sobre todo en el terreno rural, son plausibles y de realizarse pondrían al país a la altura de un Estado moderno como es el caso, por ejemplo, de la actualización del catastro de la propiedad rural, que establezca la legitimidad de las formas de propiedad, evite el conflicto y obligue a sus propietarios a pagar impuestos.

De acuerdo con las nuevas exigencias del Derecho Internacional no se concede una amnistía (como se había hecho antes) sino que se acuerda una “justicia transicional”, que obliga a los reinsertados a confesar sus delitos para tener derecho a penas leves (cinco a ocho años). El acuerdo final también establece la posibilidad de que militares y civiles que hubieran incurrido en conductas delictivas, en delitos atroces o en crímenes de lesa humanidad por razón del conflicto se puedan acoger a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que garantiza un tratamiento en condiciones de igualdad para los no guerrilleros. La lucha contra esta prerrogativa se convierte en el “caballito de batalla” del Centro Democrático bajo con la consigna de “No a la impunidad”. Pero el verdadero problema era la lucha por una “impunidad selectiva”, que recayera exclusivamente en las FARC, excluyera el paramilitarismo, los terceros comprometidos o las acciones ilegales del Estado.

La oposición de Álvaro Uribe a las negociaciones de paz va generando una polarización, que se cristaliza finalmente en el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, que Santos juzgaba necesario para que el proceso tuviera plena legitimidad. Como consecuencia de este fracaso se lleva a cabo una renegociación de lo pactado, con base en las objeciones de los partidarios del No, con excepción de dos puntos: la participación de los excombatientes de las FARC en el Congreso de la República y la Justicia Especial para la Paz. Los acuerdos, a pesar de los blindajes que se les habían puesto, se debilitan y se produce una relativa desvertebración de sus componentes. El propio Santos no es lo suficientemente solícito en su implementación en el último año y medio de su período presidencial, se consolida la polarización y algunos sectores de las FARC no se acogen a lo convenido y conforman las llamadas “disidencias”. A pesar de su

fragilidad, las negociaciones dieron como resultado la desactivación del grupo armado más poderoso y antiguo de la historia del país, con raíces en la *Violencia* de la década de 1950.

El verdadero viacrucis comienza a partir de las elecciones presidenciales de 2018 en las que compiten en segunda vuelta dos candidatos, en el marco de una extrema polarización: por un lado, Iván Duque Márquez por el Centro Democrático, que si bien no se compromete de manera explícita con “hacer trizas” los acuerdos de paz que proponen algunos sectores de su partido, si manifiesta un apoyo apenas formal. Por otro lado, el candidato de la izquierda, Gustavo Petro, partidario de su defensa e implementación. Los candidatos del centro (Humberto de la Calle y Sergio Fajardo) pasan a un segundo plano, pero sumados obtienen una votación significativa en primera vuelta, superior a la de Gustavo Petro.

Al menos tres aspectos definen la política del nuevo gobierno en lo relacionado con el proceso de paz: el compromiso de echar para atrás aspectos esenciales de los acuerdos de La Habana; la defensa de la no judicialización de aquellos que habían combatido con medios ilegales a los grupos ilegales; y el apego al estilo de hacer política que había sido exitoso en el momento en el cual las FARC estaban en su pleno apogeo: la promoción del miedo y las mentiras entre los ciudadanos para dar legitimidad a una política de seguridad, que se preocupara por defender su vida, por encima de cualquier otra prioridad.

Sin embargo, ya “la suerte estaba echada” y era imposible detener procesos irreversibles que se venían dando en el plano social. El presidente no comprendió lo que estaba ocurriendo, se apegó tercamente a los parámetros del modelo uribista de manejo del Estado, que habían sido “útiles” en su momento, con el resultado de un inmenso desencuentro entre el gobierno y la sociedad civil, que terminó de socavar las bases de la legitimidad del Estado, ya maltrechas desde tiempo atrás.

La trama de este proceso es lo que el lector encontrará descrito en las líneas siguientes. La segunda pieza del argumento que queremos sustentar es que la polarización que se construye alrededor de los acuerdos de paz con respecto a las responsabilidades de terceros y de agentes estatales en el conflicto es una de las fuentes que a la postre

contribuye a minar la legitimidad del gobierno y del Estado, y a favorecer las condiciones que hacen posible la eclosión del estallido social que conocemos en este momento, abril y mayo de 2021.

Los puntos del desencuentro

El 7 de agosto de 2018 llega a la presidencia de la República el señor Iván Duque Márquez, con una legitimidad relativamente precaria, si consideramos que la legitimidad no se limita simplemente a los aspectos formales relacionados con la mayoría de votos, sino a una serie de aspectos materiales, complementarios, que son tanto o más importantes que los primeros (Weber, 2014, pp. 334-340). El nuevo presidente obtiene 10 398 689 votos, equivalentes al 54.03 % de la votación, contra 8 040 449 votos por Gustavo Petro, equivalentes al 41.77 % (“Elecciones 2018 en Colombia”, s. f.). La diferencia es significativa y las reglas de juego democráticas se cumplen a la perfección, *ceteris paribus*, es decir, bajo el supuesto de que los votos hayan sido obtenidos sin interferencia de “dineros calientes” o de manejos turbios del electorado, la compra de votos o la coacción.

No obstante, cuando consideramos la legitimidad desde el punto de vista material nos encontramos con que la situación no era tan favorable para el nuevo presidente. En primer lugar, la que ganó efectivamente la votación fue la polarización. Las cualidades personales del ganador o su preparación para el oficio, más allá de su simpatía y su bonhomía, no incidieron mucho en una elección que se produjo más por oposición a un contendor que por méritos propios (los electores votaron a favor de Duque en contra de Petro y viceversa), con el aditamento de que buena parte de su legitimidad provenía de la delegación de un mandato por parte de Álvaro Uribe, quien era realmente el “dueño de los votos”. Este apoyo, además, era relativamente precario porque el Uribe de 2018 no era el mismo del 2009 cuando, con su alto prestigio en las encuestas, apoyó al candidato Juan Manuel Santos, como su elegido y continuador de su proyecto. Su aprobación se había menoscabado en un sector importante del electorado, con el agravante de que había varios procesos judiciales corriendo en su contra, que